

Argentina

A cuatro años del golpe de Estado

Oscar J. Serrat/AP

BUENOS AIRES, 23 de marzo. — El régimen militar argentino cumple mañana cuatro años, con un historial combinado de logros y fracasos y sin que haya aún precisado cuanto más permanecerá en el poder. Algunos voceros oficiales hablan de seis y aun diez años más de gobierno de las fuerzas armadas, al tiempo que repiten que esta vez los militares tienen objetivos y no plazos. "Queremos terminar con la sucesión de gobiernos civiles débiles y regímenes militares fuertes" ha dicho el presidente Jorge R. Videla. Los adversarios y también los observadores señalan que aunque evidentemente los militares no desean, esta vez, dejar el gobierno presionados por un clima general hostil, como ocurrió en 1973, la última palabra la dirá la relación de fuerzas que se establezca entre los servicios armados y los grupos civiles, y ello seguramente escapará a la voluntad de unos y otros, en un país sumamente complejo.

Por ahora, los partidos políticos, con sus actividades todavía suspendidas, no han reclamado elecciones, pero han comenzado a pedir que el gobierno inicie la marcha hacia la normalización institucional. Como respuesta, las autoridades se disponen a abrir un diálogo con todos los sectores —incluyendo a los políticos— con la finalidad de que sus interlocutores civiles "enriquezcan" las llamadas "bases políticas" sentadas por el propio gobierno en diciembre; en ellas se proclama la adhesión al sistema democrático representativo, pero también se reserva a las fuerzas armadas un poder político inédito en el futuro sistema constitucional. Se excluye, por ejemplo, a quienes propugnen la lucha de clases, el populismo o la demagogia. Los líderes políticos han dicho que aceptan dialogar, siempre y cuando sea sobre temas significativos y no pa-

ra ser notificados de hechos consumados. El presidente Videla dijo que de esta nueva etapa de "creatividad" quedarán excluidos los "subversivos", los "corruptos" y quienes se "auto-marginen".

Las invitaciones que haga el ministerio del Interior a partir de la presente semana darán una idea más clara de cuáles serán los márgenes de legalidad que el gobierno tolerará, a su derecha e izquierda. Y del contenido de las conversaciones, que estarán a cargo del ministro del interior, general Albano Harguindéguay, deducirán los políticos si el diálogo será un mero *divertimento*, como insinuó el líder del radicalismo, o si se tratará de una "convergencia cívico-militar" que todos los grupos acepten, aunque interpretándola de manera distinta. Pero de algo están seguros los políticos: no tendrán ninguna intervención en la selección del sucesor del general Videla, quien finalizará su mandato el 29 de marzo de 1981; la designación estará a cargo de la junta militar (formada por los tres comandantes de las fuerzas armadas), y se estima que el candidato más firme es el general Roberto Viola, ex jefe del ejército.

Para el gobierno, sus mayores logros han sido su victoria frente a bien montadas organizaciones guerrilleras que las autoridades dicen hoy están militarmente aniquiladas, su orientación exterior, considerada pragmática, y los frutos que, supuestamente, ha comenzado a

dar su controvertida política económica. La violencia que imperaba en marzo de 1976 ha desaparecido casi completamente, tras la derrota de los grupos armados izquierdistas y peronistas radicalizados que desafiaban abiertamente a las fuerzas armadas y de seguridad. El precio pagado por el gobierno militar ha sido muy alto. La implacable represión de las organizaciones guerrilleras, que se extendió indiscriminadamente a otros sectores disidentes no violentos, produjo miles de muertos y de desaparecidos. Generó también una vasta campaña mundial de protesta, alentada por entidades defensoras de los derechos humanos tales como Amnistía Internacional y por la política seguida en esa materia por la administración del presidente Carter. A partir de fines de 1976, esa campaña se convirtió en la principal preocupación del gobierno de Videla, ya que se tradujo en suspensión de créditos en organismos internacionales, denuncias en distintos foros mundiales, artículos condenatorios en diarios y revistas de Europa y Estados Unidos y, finalmente, en documentos críticos de organismos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el propio Departamento de Estado.

La situación ha mejorado sensiblemente en los últimos 12 meses, como admiten grupos defensores de los derechos humanos, a medida que se reducían considerablemente los secuestros y los episodios de violencia política.

El gobierno ha prometido monopolizar el uso de la fuerza y parece en camino de lograrlo, pero las fuerzas armadas han afirmado, también, que las muertes y desapariciones ocurridas son consecuencia de una verdadera "guerra sucia" que debieron librar y de cuya responsabilidad acusan al terrorismo. Voceros oficiales han dicho también que la campaña exterior se debe o bien a la "incomprensión" de gobiernos y políticos extranjeros, o a manes urdidos por grupos guerrilleros exiliados.

La política exterior del gobierno es quizá el aspecto menos controvertido de su gestión. Aunque el régimen militar se ha proclamado anticomunista, occidental y cristiano, ha mantenido relaciones normales y un comercio muy fluido con la Unión Soviética y los países del campo socialista. Las relaciones diplomáticas comerciales con Cuba, iniciadas en 1973, se han mantenido. El gobierno de Videla, si bien condenó el ingreso de tropas soviéticas en Afganistán, rehusó sumarse al embargo cerealeiro dispuesto por Estados Unidos contra la URSS. Por el contrario, parece en camino de aumentar sus ventas de granos a Moscú.

Argentina ha emprendido, también, un ambicioso programa nuclear, que ha despertado resistencia en Estados Unidos, ante la negativa de este país de suscribir el tratado de no proliferación nuclear, al que considera discriminatorio para las naciones de desarrollo. El gobierno logró también solucionar, tras larga y difícil negociación, un antiguo diferendo con Brasil sobre el aprovechamiento de ríos internacionales. Pero en cambio no se presenta fácil la superación de un diferendo fronterizo austral con Chile, sometido a la mediación de la Santa Sede, que estuvo a punto de provocar una guerra a fines de 1978.

Intento por mejorar las relaciones

Cuarta misión de EU a Argentina

BUENOS AIRES, 23 de marzo (PL, DPA, Latin). — En un nuevo intento por mejorar sus relaciones con este país, llegó hoy aquí la cuarta misión estadounidense en dos meses. Gerard Smith, emisario especial del presidente Carter y Allen Locke, un alto funcionario especializado en cuestiones nucleares arribaron a esta capital en momentos en que también llegaba una delegación de técnicos nucleares germanoccidentales.

La decisión argentina de mantener su autonomía en el terreno de la energía atómica apelando incluso a la colaboración soviética; el anuncio de que este país podría, si quisiera, construir su propia bomba atómica y el acuerdo logrado con la RFA para la conclusión de la planta nuclear Atucha II, son temas que preocupan a las naciones occidentales, acordaron diversas fuentes diplomáticas acreditadas en esta capital.

Por otro lado, se publicaron hoy en Madrid declaraciones del ex presidente argentino Héctor J. Cámpora. El ex mandatario, ahora asilado en México, dijo a *El País* que "los proyectos políticos de las fuerzas armadas argentinas resultan inviables" y que "es el pueblo quien concientemente deberá decidir sobre las formas jurídico-institucionales para garantizar la democracia en el futuro.

Cámpora aseguró que "pacificar el país es una necesidad" y que "ni el enfrentamiento ni la guerra son métodos adecuados para lograr esa pacificación". El ex presidente se manifestó partidario de "establecer de una vez para siempre un sistema político representativo que suponga asegurar el respeto a la voluntad de la mayoría, en un marco de pluralismo democrático".